



## Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-ND 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:  
**Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-ND 2.5)**  
Para leer el texto completo de la licencia, visita:  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/>

### Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra  
hacer un uso comercial de esta obra

### Bajo las condiciones siguientes:



**Atribución** — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



**Sin Obras Derivadas** — No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.

# **Análisis jurídico del acto administrativo electrónico**

## **legal analysis of the electronic administrative act**

Leidy Tatiana Vargas Arenas  
Universidad Católica de Colombia<sup>1</sup>

### **Resumen**

Los avances tecnológicos se han visto inmersos en toda la esfera del derecho, particularmente en lo concerniente a la administración pública. Por esta razón, es pertinente estudiar la implementación e importancia que ostentan los actos administrativos de carácter electrónico en Colombia y también en una visión comparada, específicamente con España y Chile. En el entendido tal que los actos administrativos son esencialmente manifestaciones de voluntad y querer por parte de la administración, con lo cual; al ser electrónicos se han tenido que desarrollar en campos completamente virtuales y su regulación se ha tornado un poco distinta. De tal manera, que resulta relevante estudiar todo lo concerniente a las reglas del acto administrativo, basado principalmente en análisis jurisprudenciales, en donde se pretende esbozar ciertos pronunciamientos que la doctrina no ha dado.

**Palabras clave:** Acto administrativo Electrónico, Jurisprudencia, Reglas, Derecho comparado, Colombia, España, Chile.

### **Abstract**

Technological advances have been related within law, particularly in regards to public administration. For this reason, it is relevant to study the application and importance of electronic administrative acts in Colombia and also specifically compared to Spain and Chile. Understanding that administrative acts are essentially manifestations of willingness by the administration, wich; by being electronic, it have to being developot in entirelly virtual fields

---

<sup>1</sup> Artículo de investigación presentado como requisito para optar por el título de Abogada de la Universidad Católica de Colombia, bajo la asesoría del Doctor Luis Germán Ortega Ruíz.

“Estudiante en proceso de grado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia identificada con el código estudiantil 2112108 y correo electrónico: ltvargas08@ucatolica.edu.co.

and its regulations has turned out to be a bit different. In such a way, it results to be relevant to study all related to administrative acts' rules, based primarily on jurisprudential analysis, in which it tends to sketch out some pronouncements that doctrine has not given.

**Keywords:** Electronic administrative act, Jurisprudence, Rules, Comparative Law, Colombia, Spain, Chile.

## **Sumario**

**INTRODUCCIÓN, 1. Naturaleza Jurídica del Acto Administrativo Electrónico a través del desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado, 2. Naturaleza Jurídica del Acto Administrativo Electrónico a través del desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, 3. Naturaleza Jurídica del Acto Administrativo Electrónico a través del desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. 3.1. Firma electrónica y firma digital. 4. Desarrollo del Acto Administrativo Electrónico en Chile, 4.1. Desarrollo del Acto Administrativo Electrónico en España. Conclusiones. REFERENCIAS.**

## **INTRODUCCIÓN**

En el presente escrito se pretende desarrollar ¿Cuál es el desarrollo jurisprudencial del acto administrativo electrónico? Para ello, es necesario indagar y analizar la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con la naturaleza jurídica del Acto Administrativo Electrónico. Además, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la naturaleza jurídica del Acto Administrativo Electrónico y determinar cuál ha sido el desarrollo del Acto Administrativo Electrónico en España y Chile.

En efecto, los actos administrativos electrónicos consisten básicamente en la manifestación de voluntad o el querer por parte de la administración, que se emiten a través de medios electrónicos. Esto se encuentra amparado en el artículo 57 del de la Ley 1437 del año 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; más conocido como el CPACA. En donde se expresa que, todas las autoridades pueden generar de manera válida actos administrativos que sean en medios tecnológicos. Sin

embargo, es importante garantizar siempre la disponibilidad, autenticidad e integridad del acto mismo, puesto que estas son las características esenciales que deben contener para su idónea ejecución (Ley 1437, 2011).

Dicho lo anteriormente planteado, se debe tener en cuenta que es necesario establecer si los argumentos jurídicos de la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de medios tecnológicos; específicamente en lo concerniente a los actos administrativos de carácter electrónico, en cómo se encuentran suficientemente justificados y componen un posible desarrollo y una fuente de inclusión para la revolución de las nuevas tecnologías. En consecuencia, lograr comprender un poco más a fondo la justicia en línea, el acceso y uso del acto administrativo electrónico y particularmente sus reglas desde una perspectiva jurisprudencial, con el fin esencial de lograr un aporte investigativo; teniendo en cuenta todas las bases o herramientas que el gobierno tecnológico pueda facilitar para la composición de una verdadera solución en la descongestión de la administración pública. De tal manera que, se torne indispensable estudiar con mayor profundidad la implementación y aplicación que han generado los aportes jurisprudenciales, en donde se determinan distintas posturas que contribuirán a un mejor entendimiento en la materia y así mismo, conllevará un eficiente análisis comparativo sobre las diversas posturas. Además, se quiere brindar una breve explicación en materia probatoria sobre lo que ha expresado la Corte Suprema de Justicia y de igual manera, lograr entender cuáles han sido las pronunciaciones de la Corte Constitucional acerca del acto administrativo de carácter electrónico.

## **Metodología**

En la presente investigación se puede observar un fin metodológico y hermenéutico, puesto que cuenta con un alcance gramatical de los textos normativos y de la jurisprudencia, contiene además un método de investigación meramente analítico por parte de la escritora; porque si bien es cierto, el problema jurídico no es el significado atribuible a una norma jurídica. Sin embargo, su solución y contenido si se le atribuye a una norma jurídica. Por tanto, se esbozarán estrategias de interpretación legal, argumentos idóneos para poder investigar y aportar un significado para la norma; específicamente la Ley 1437 del año 2011 y la Ley 527 de 1999 que son el objeto de estudio. En otras palabras, se pretenderá

desarrollar y analizar la teoría del Acto Administrativo; profundizando cada uno de los temas señalados en el texto anterior

### **1. Naturaleza jurídica del acto administrativo electrónico a través del desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado**

Para comenzar es importante expresar que, existen tantas definiciones sobre Acto Administrativo de carácter electrónico como tantas posturas hay por parte de juristas expertos en la materia. Por esta razón, es indispensable traer a colación varios pronunciamientos del Consejo de Estado para poder comprender con mayor profundidad el concepto y así lograr establecer las reglas del acto mismo.

Con el fin de analizar a mayor profundidad el concepto de Acto Administrativo de carácter Electrónico sustentado en la jurisprudencia del Consejo de Estado, es pertinente conocer los antecedentes de la figura y las diferentes posturas que se evidencian en cada época. En efecto, como consecuencia de los pocos avances tecnológicos que se tenían anteriormente; no existía noción sobre los Actos Administrativos en la modalidad electrónica. Sin embargo, esta situación fue evolucionando al pasar de los días, y gracias al primer Código Contencioso Administrativo en Colombia mencionado como la Ley 130 del año 1993 se dio a conocer un concepto sobre el tema que previamente a través de una pronunciación por parte del Consejero ponente Luis Felipe Rosales, específicamente el 26 de noviembre del año 1917, se reafirmó, de tal manera que;

Los actos y contratos entre particulares que es a los que se refiere el artículo 1746 del Código Civil no tiene la misma extensión tratándose de los actos y providencias emanados de la Administración Pública que se rigen por la Constitución y por disposiciones especiales como ordenanzas de las Asambleas, acuerdos municipales, decretos ejecutivos. (Consejo de Estado, Auto 26 noviembre, 1917)

De igual manera, en una ponencia del año 1934 con el consejero ponente el doctor Nicasio Anzola, se determinó que un acto administrativo era básicamente una declaración unilateral por parte de la administración referente a un servicio público que se encontraba amparado por la Ley del mismo. (Consejo de Estado, Auto 24 Abril, 1934). Es decir, produce

efectos jurídicos concernientes a beneficiar u obligar a un número determinado de personas (Bernal, 2008).

Con lo anteriormente reflejado, se ha podido inferir que con la ayuda de las nuevas tecnologías el avance y evolución en la administración pública es cada vez más progresiva y sin duda alguna, dejará diversos impactos en la sociedad. Por tal motivo, el pronunciamiento por parte del Consejo de Estado, específicamente en el año 1995 con el Consejero Ponente Manuel Buenahora, se manifiesta que la noción o concepto de acto administrativo es fundamentalmente una pronunciación por parte de un servidor público que ejerce funciones y potestades en nombre de la administración. Además, tiene un sentido restringido y es que este se realiza de forma escrita con el fin de lograr efectos jurídicos que conduzcan primordialmente al cumplimiento de una función pública. Por otra parte, es necesario explicar que lo mencionado anteriormente fue el primer pronunciamiento con profundidad, ya que el acto administrativo debe ir escrito, es importante resaltar que esto es una brecha clave para lo que posteriormente se conocerá como acto administrativo plasmado en un documento electrónico. (Consejo de Estado, Auto de 22 julio, 1955)

Asimismo, una sentencia del Consejo de Estado del año 1961 expresa que el acto administrativo es;

El desarrollo o la culminación del querer de la administración dirigido a obtener determinadas consecuencias de derecho. Como los mandatos constitucionales y legales que aplica el órgano ejecutivo dentro de la órbita de su competencia, no tienen objetivo distinto que el de crear situaciones de derecho, la decisión que los aplica ha de perseguir idénticas finalidades y genera consecuencias jurídicas. (Consejo de Estado, Sentencia 14 junio, 1961)

Es imprescindible mencionar que existe un fallo del año 2014 por parte de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en donde;

Se ha de definir el acto administrativo como toda declaración de voluntad, juicio, cognición o deseo que se profiere de manera unilateral, en ejercicio de la función administrativa, y produce efectos jurídicos directos o definitivos sobre un asunto determinado. (Fallo, 17 enero, 2014)

Ahora bien, los actos administrativos electrónicos son los que tienden a crear, modificar o extinguir un derecho que se encuentra en cabeza de una comunidad de personas, debido a

un actuar oficioso por parte de la administración (Ruiz, 2016). Básicamente, el acto administrativo electrónico se configura cuando una autoridad se encuentra ejerciendo funciones de la administración, y emite una decisión tendiente a producir efectos jurídicos; con el fin de garantizar siempre la esencia del Estado.

El concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública define expresamente que el acto administrativo electrónico está en la potestad de las autoridades, donde; “en el ejercicio de sus funciones, podrán emitir válidamente actos administrativos por medios electrónicos siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad de acuerdo con la ley” (Concepto 187921, 2017. Art 62)

De igual manera, los actos administrativos de carácter electrónico deben contener herramientas indispensables para el acto mismo, tales como; sujetos, objeto, fin y formalidad. Puesto que todos estos elementos componen un verdadero cumplimiento a los principios de integridad, disponibilidad y autenticidad. Sin embargo, existen otras dos figuras igual de importantes, las cuales son; los requisitos de existencia y validez. De tal manera que, el acto administrativo electrónico:

debe garantizar los principios de la administración electrónica los cuales son el debido proceso, la buena fe, la imparcialidad, la igualdad, la participación, la moralidad, la transparencia, la responsabilidad, la publicidad, la coordinación, la economía, la eficacia y la celeridad. (Consejo de Estado, Sentencia 00189/14, 2017)

Dicho esto, se puede notar como la implementación y conceptualización que se tiene hoy en día por la herramienta de medios electrónicos; tiene una serie de instrumentos jurídicos que permiten poner en equivalencia todas las actuaciones electrónicas en la administración en comparación con las que no lo son, porque dichas actuaciones electrónicas ahora se encuentran idóneamente respaldadas y fungen como una herramienta de evolución y cambio positivo que si bien es cierto se deberá ir desarrollando más; pues son una brecha del progreso y de la construcción positiva.

El Consejo de Estado ha explicado que la finalidad de los actos administrativos de carácter electrónico es el cumplimiento de todos los requisitos indispensables de los actos administrativos que se encuentran plasmados en el papel. En otras palabras, que el acto administrativo por vía electrónica en ningún momento debe ser alterado o modificado ya que

se debe aportar cierta seguridad para los administrados. De igual manera, el acto administrativo electrónico debe ir permeado del principio de autenticidad, lo cual quiere decir que; “una vez se tiene la autenticidad probada, esta contrarresta o elimina toda duda de falsedad, dicho principio ayuda a efectuar un cometido en el acto administrativo de carácter electrónico”. (Consejo de Estado, Sentencia 18 marzo, 2010)

También, gracias a la jurisprudencia del de año 2015, con la consejera ponente Stella Conto Díaz del Catillo, salió a la luz el principio de la inalterabilidad imputable al acto administrativo de carácter electrónico con el fin primordial de aportarle al documento electrónico una autenticidad. De tal manera que, al expedirse el acto administrativo electrónico este se presume inalterable e inmodificable por terceras personas. Lo cual garantiza que el documento en ningún caso se distorsione por parte del competente de la administración. Es importante mencionar que, este componente también se encuentra regulado por la Ley 527 del año 1999, en tal sentido que; le da confiabilidad e inmutabilidad a las cualidades del acto administrativo electrónico (Consejo de Estado, Sentencia 29 abril, 2020).

Asimismo, el acto administrativo electrónico debe ir sustentado con el principio de integridad, ya que por este medio se asegura la publicación del acto administrativo por vía electrónica. En pocas palabras, quiere inferir que así como el contenido del acto se envía, de igual manera se debe recibir; ya que no se debe perder la exactitud del documento y esto se puede supervisar adecuadamente con los medios tecnológicos que aporta la administración pública. (Consejo de Estado, Sentencia 16 junio, 2020).

En la misma sentencia, se explica la figura del no repudio atribuible al acto administrativo electrónico, este principio;

Fija su esencia en la derivación que se le da a la autenticidad y que esta de cierta manera no debe y no puede ser desafiada en ningún caso. Además de ello, se utiliza específicamente para la firma digital y suele tener dos mandamientos basados en el no repudio por parte de la administración, pero también por parte del administrado. (Consejo de Estado, Sentencia 07 mayo, 2020)

Además, el no repudio también se puede considerar como la irrenunciabilidad al beneficio de seguridad que se tiene en la comunicación entre la administración con el



administrado, en otras palabras, le concede también otro elemento importante de seguridad al acto administrativo de carácter electrónico y a la firma del documento. (Flórez, 2014). Pues parte de la idea de que sé está completamente seguro de lo que se firma, y además se está de acuerdo completamente con el contenido del acto. En efecto, este principio juega uno de los papeles más importantes ya que le otorga una seguridad y facilidad a la firma del acto administrativo. En donde contiene la misma validez y equivalencia del acto que se encuentra plasmado en el papel. Como se dijo anteriormente, este principio se encuentra intrínsecamente ligado a la firma digital (Consejo de Estado, Sentencia 04 Mayo, 2020).

Por otro lado, para hablar de acto administrativo electrónico, es necesario tener el concepto de documento electrónico. Debido a que gracias a los avances tecnológicos los documentos plasmados en el papel han quedado un poco obsoletos y se han visto sustituidos por los medios electrónicos. Sin embargo, una jurisprudencia del Consejo de Estado es muy enfática al manifestar que se debe tener en cuenta la diferenciación entre documento electrónico y documento digital. Ya que suelen utilizarlos como sinónimos pero la verdad es que no hacen referencia a lo mismo. Por un lado, el documento digital es un poco más restringido y por el contrario el documento electrónico lo tiende a globalizar. (Consejo de Estado, Sentencia 30 abril, 2020)

Es importante establecer que el acto administrativo para que produzca efectos jurídicos debe ser debidamente publicado y el acto administrativo al ser electrónico, su publicación debe hacerse por este medio ya que se deben garantizar los mismos resultados y finalidades prácticos que ostentan las notificaciones o publicaciones presenciales concernientes al conocimiento de la decisión y a la posibilidad de ejercer todos los recursos pertinentes a los que haya lugar (Pérez, 2013). Por tal motivo, para poder obtener los mismos resultados, el ordenamiento jurídico establece una figura conocida como equivalencia funcional que se caracteriza fundamentalmente por contener todos los requisitos necesarios para garantizar los derechos de todos los interesados con los actos administrativos de carácter electrónico (Consejo de Estado, Sentencia 28 abril, 2020).

Por otra parte, existe una figura de conocida como ejecutividad que también hace parte de las reglas generales del acto administrativo, para el Consejo de Estado, es un concepto

fundante de las cualidades sustanciales que poseen todos los actos administrativos y se diferencian de la ejecutoriedad porque simplemente son cualidad instrumental de los actos administrativos. De igual manera, la ejecutividad consiste en ser una cualidad atribuible al acto mismo, de tal forma que, por el simple hecho de que la decisión provenga por parte de la administración; tiene la facultad de crear relaciones jurídicas de manera unilateral y de contenido completamente obligatorio (Consejo de Estado, Sentencia 19 febrero, 2020).

Otra de las reglas más generales de los actos administrativos electrónicos de carácter general, es la publicación, para el Consejo de Estado, es la manera en como se surte una adecuada comunicación entre la administración con los administrados, comúnmente esa publicación se realiza a través de la gaceta del diario oficial de amplia circulación nacional. En donde la publicación permitirá el inicio o apertura para el acto administrativo.

Es así como en el derecho colombiano se ha venido evidenciando una constante evolución con respecto a las tecnologías de la información, es por esta razón que la administración pública se ha tenido que acoger a los diversos cambios y avances en aras de preservar los principios constitucionales y la salvaguarda de los fines esenciales del Estado. Sin embargo, hoy en día todos los medios presenciales han quedado altamente obsoletos y han tenido que ser sustituidos por los medios electrónicos, con el fin primordial de garantizar la agilidad en todos los procesos o procedimientos y generar más confianza junto con el principio de transparencia (Torres, 2016). Debido a esto, para poder comprender un poco más a fondo el acto administrativo electrónico de carácter general, es pertinente abordar principalmente el acto administrativo en la forma normal; como comúnmente se conoce.

Aunque, para el acto administrativo de carácter electrónico es indispensable tener en cuenta ciertas reglas adicionales que ayudarán a la composición del mismo. Como ya se mencionó anteriormente, uno de los primeros requisitos se encuentran con el documento electrónico. El Consejo de Estado ha precisado que, el documento electrónico no es más “aquel documento que precisa de una máquina que funcione de forma electrónica, sea analógica o digital, para poder ser reproducido o visualizado” (Fuentes, 2017, p, 21).

En otras palabras, los documentos electrónicos son los que sencillamente se tienen que estructurar a través de medios tecnológicos y que se tornen completamente funcionales.

Por otro lado, otro concepto jurisprudencial emitido por el Consejo de Estado manifiesta que el documento electrónico es;

El conjunto de información binaria que reside en un determinado soporte y al que llamamos documento electrónico no puede considerarse como un documento más que en el momento que es reproducido por un ordenador; sin esta acción, no existe como tal... (Consejo de Estado, Sentencia 11 mayo, 2020)

Además, es imprescindible tener presente que el documento electrónico se compone de tres fases, las cuales son:

la primera de ellas, es la física, el computador o hardware, la segunda, la lógica, que es el programa o software, y la tercera, la conceptual, consistente en que el usuario al utilizar las dos primeras, puede visualizar y utilizar el Documento Electrónico. (Consejo de Estado, Sentencia 6 febrero, 2020)

De igual manera, existe otra postura en donde definen al componente electrónico como; aquel que su soporte es electrónico y que para su lectura y escritura requiere de dispositivos electrónicos, y se diferencia del Documento Digital, el cual tiene su información codificada en bits, dando como resultado que el Documento Digital, es solamente una posibilidad del Documento Electrónico. (Consejo de Estado, Sentencia 23 enero, 2020)

Dicho documento electrónico debe contener los elementos indispensables de autenticidad y fiabilidad, esto indica que;

Las organizaciones deberían implantar y documentar políticas y procedimientos para el control de la creación, recepción, transmisión, mantenimiento y disposición de los documentos de archivo de manera que se asegure que los creadores de los mismos estén autorizados e identificados y que los documentos estén protegidos frente a cualquier adición, supresión, modificación, utilización u ocultación no autorizadas. (Consejo de Estado, Sentencia 1 agosto, 2019)

Asimismo,

Otra de las características de un documento de archivo es su Fiabilidad, que consisten en que su contenido puede ser considerado una representación completa y precisa de las operaciones, las actividades o los hechos de los que

da testimonio y al que se puede recurrir con posterioridad. (Consejo de Estado, Sentencia 28 mayo, 2019)

Una segunda característica que debe componer un documento electrónico para la configuración de un acto administrativo electrónico de carácter general, es la figura de la integridad que se destaca porque el documento en principio se encuentra completo por ningún motivo ha sido alterado (Laguado, 2003). Como tercer característica se encuentra la figura de la disponibilidad, atribuible también al documento electrónico, ya que esta permite una total localización del documento para que pueda ser recuperado, presentado e interpretado idóneamente (Fernández, 2015).

En Colombia, para el acto administrativo electrónico de carácter general es indispensable tener en cuenta la regla de firma digital que funge como el elemento más importante de seguridad para el acto administrativo y con lo cual; será de obligatorio cumplimiento. Este componente le aporta al administrado una certeza de que quién firmó el acto administrativo es plenamente competente. La Ley 527 de 1999 le concedió plena validez jurídica al uso de los mensajes de datos y específicamente a la firma digital, manifestando que es;

Un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación. (Ley 527, artículo 2, 1999)

En el ordenamiento jurídico se establece que “la falta de promulgación de un acto administrativo de carácter general no es causal de nulidad” (Consejo de Estado, Sentencia 30 mayo, 1988). Es decir que, en esta sentencia del Consejo de Estado, se estaba debatiendo una sanción que el ordenamiento jurídico propone, específicamente cuando no se cumple este requisito. Por tal razón, se decidió que; el acto administrativo que respeta todas las normas sin falsa motivación y sin desviación de todas las atribuciones que le son propias, es un acto administrativo completamente válido. En este sentido, la publicación no es necesariamente un requisito de validez del acto administrativo de carácter general; simplemente se tiene como una cuestión de oponibilidad por parte de los particulares. De tal manera que en la jurisprudencia del Consejo de Estado, el acto administrativo que no se publica se debe

observar detalladamente con respecto a las relaciones que soporta con los particulares y con la administración. Sin embargo, el acto administrativo no publicado se torna oponible a la administración y surte efectos con respecto a la misma.

Por otro lado, dentro del mismo debate filosófico, se aclaró que; se debe diferenciar si el acto administrativo reconoce algún derecho o más bien le impone una obligación al particular. De tal manera que, si dicho acto administrativo le otorga un derecho al particular; entonces puede reclamarlo a la administración, incluso aun cuando no se haya publicado el acto. Pero por el lado diferente, si el acto administrativo impone una obligación, no se puede exigir hasta que el acto no haya sido publicado.

Para poder llegar a esta conclusión, la sala de lo Contencioso Administrativo determinó que el acto administrativo no puede ser nulo, cuándo se basa en todas las disposiciones anteriormente resaltadas y que, en definitiva el acto administrativo no es obligatorio a los particulares aun si no ha sido publicado debidamente. En este caso en concreto, se presentó una demanda de nulidad en donde se mencionaron todas las razones anteriormente expuestas y en donde se procedió a fallar el conceder la nulidad del acto administrativo en discusión. (Sánchez, 2014).

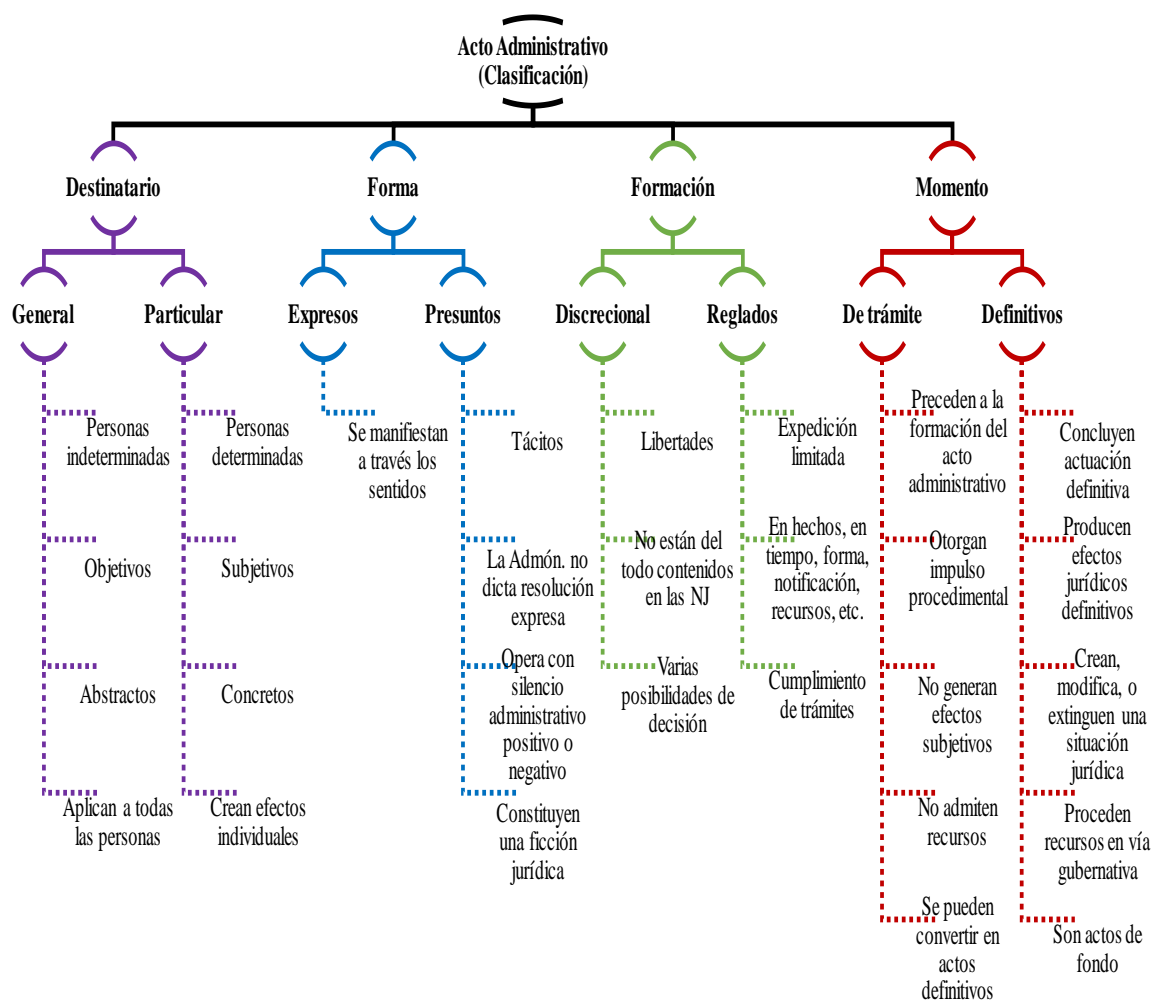
Asimismo, en otra sentencia del Consejo de Estado, se estaba debatiendo la nulidad simple de dos actos administrativos debido a que violaban algunos preceptos de la Constitución Política de 1991. Pese a esa situación, la sala declara la nulidad de ambos Decretos que se encontraban en contravía con la Carta Política, fundamentándose en que se debatía un Acta No. 46 de 9 de mayo de 2008, y se determinó que no se reunía con todas las características que ostentaba un acto administrativo definitivo y que por tanto, dicho acto administrativo debía contener ciertas exigencias, las cuales se traducían en; modificar, crear o extinguir situaciones netamente jurídicas (Consejo de Estado, Sentencia, 5 agosto, 2010).

En otro apartado, para poder entender un poco más a fondo la figura del acto administrativo de carácter electrónico, es indispensable aducir que el acto administrativo más convencional, es decir, el que se encuentra plasmado en el papel; cuanta con una clasificación que ayuda a estructurar el concepto de acto. (Rodríguez, 2017). De tal manera que es imprescindible resaltar que se encuentra permeado de una decisión en donde se genera una situación jurídica y que forma parte integral de la estructura del Estado. Así que, se debe

tener muy en cuenta que el fin primordial es poder cumplir los fines esenciales del mismo. (Ver figura 1).

**Figura 1**

**Características de Actos Administrativos parte 1.**



**Nota:** Los actos administrativos se clasifican en destinatario, forma, formación, momento. Creación propia.

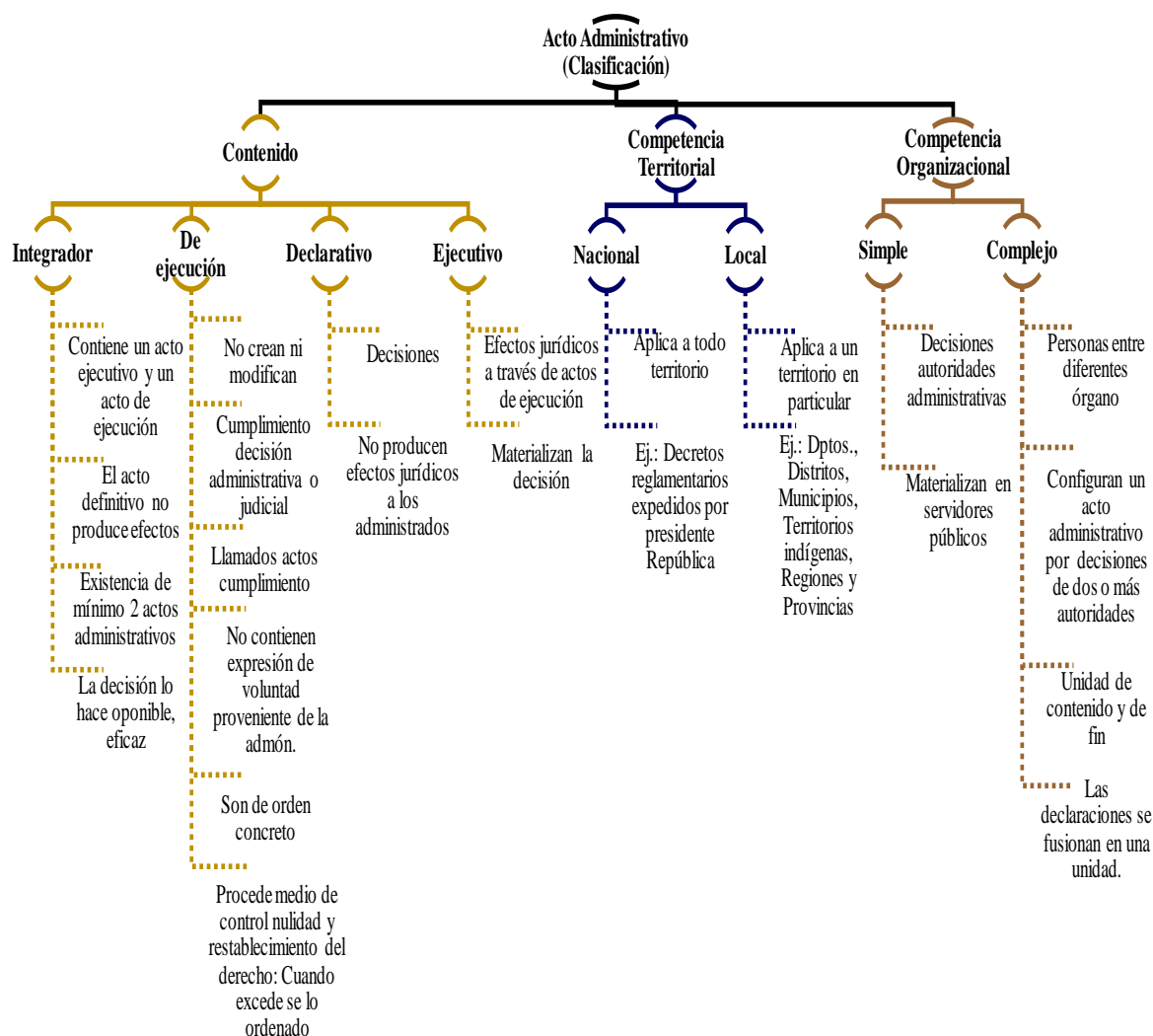
**Fuente:** Adaptado de

: Ortega, L. (2018). El Acto administrativo en los procesos y procedimientos. Editorial: Universidad Católica de Colombia.

Es sustancial reiterar que los actos administrativos de carácter general no admiten recurso alguno; tampoco los de trámite, preparatorios y de ejecución (Ortega, 2018). La jurisprudencia del Consejo de Estado se ha pronunciado con respecto a los recursos que proceden contra los actos administrativos de carácter definitivo, los cuales son; el recurso de reposición, básicamente este se encuentra dirigido al ente que expidió la decisión con el fin esencial de que modifique, aclare o adicione algún precepto. Por otro lado, se encuentra el recurso de apelación que va dirigido al superior jerárquico y el recurso de queja que procede cuando se rechaza el recurso de apelación. Sin embargo, este recurso se torna facultativo (Consejo de Estado, Sentencia 25 mayo, 2017). (Ver figura 2)

**Figura 2**

**Características de Actos administrativos parte 2.**



**Nota: Los actos administrativos se clasifican en integrador, de ejecución, declarativo, ejecutivo, nacional, local, simple, complejo. Creación propia.**

**Fuente:** Adaptado de

: Ortega, L. (2018). El Acto administrativo en los procesos y procedimientos. Editorial: Universidad Católica de Colombia.

De igual manera, la jurisprudencia de Colombia para poder definir con mayor exactitud el acto administrativo de carácter electrónico, ha profundizado en otras clases de actos administrativos con el fin particular de otorgar un mayor entendimiento y aportar un mayor precedente jurisprudencial. Sin embargo, complementando todo lo dicho en el presente texto; existe un elemento que tienen en común todos los actos administrativos y este se deriva de la voluntad que posteriormente se materializa en una decisión y es preciso que dicha voluntad se encuentre permeada de validez, es decir, que quien emita el pronunciamiento cuente con una capacidad jurídica para ello con el fin de producir efectos jurídicos (Fonseca, 2012). Por tal motivo se torna indispensable que todos los actos administrativos sean válidos. De tal manera; que toda manifestación de la voluntad se encuentra plasmada por medio de un acto administrativo.

Es así como el componente de existencia tiene mucho que ver con la manifestación de la voluntad por parte de la administración, se intuye también que una vez la autoridad expida el acto administrativo, éste nace a la vida jurídica. De tal manera que;

La existencia del acto administrativo está ligada al momento en que la voluntad de la administración se manifiesta a través de una decisión. El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz (Consejo de Estado, Sentencia 17 mayo, 2018)

De esta manera, la voluntad se constituye como un requisito indispensable del acto administrativo aún de carácter electrónico. Debido a que; "el acto administrativo es voluntad, reflexión, conocimiento o inteligencia que se declara en el ejercicio de la función administrativa y que produce efectos jurídicos de carácter general o individual" (Muñoz,



2017, p, 13). Lo anterior se traduce en que si no se exterioriza el acto administrativo no puede nacer a la vida jurídica y de igual manera, no puede producir ningún efecto jurídico.

Es así como uno de los requisitos más indispensables del acto administrativo se traduce en la validez, ya que significa la correlación del acto administrativo en el marco del ordenamiento jurídico. En otras palabras, para que exista la validez del acto administrativo se deben llenar una serie de requisitos con el fin esencial de que la manifestación de la voluntad por parte de la administración produzca efectos jurídicos, de lo contrario; se encontraría viciado de nulidad (Sánchez Torres, 2007). En otras palabras; "cuando se establezca la ausencia de uno de tales elementos, el acto administrativo así expedido no cumple con las exigencias legales y por ello se reputa viciado de nulidad" (Consejo de Estado, Sentencia 11 julio, 2019)

Conforme a lo anteriormente señalado, no puede faltar ningún elemento que compone al acto administrativo ya que este no sería válido y podrá ser declarado nulo a través de sede judicial. La jurisprudencia se ha pronunciado con respecto a algunos requisitos que de no existir; acarrearían su nulidad. Los cuales son, los sujetos, el objeto o contenido del acto administrativo, las razones de hecho o de derecho que se necesitaron para producir el acto administrativo, los fines indispensables que se quieren al expedir el acto administrativo, la forma y formalidad o el trámite respectivo.

Por otro lado, se encuentra el elemento de eficacia del acto administrativo de carácter electrónico, en donde se debe tener en cuenta que es una consecuencia de su expedición. Es decir, previamente se le debe dar cumplimiento a todos los requisitos imprescindibles que constituyen la validez del acto mismo; posteriormente a ello, se debe encontrar totalmente disponible y viable para producir efectos jurídicos. (Ver tabla 1).

***Tabla 1***

***Clasificación y reglas de las clases de actos administrativos.***

<b>ACTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>CLASIFICACIÓN - REGLAS</b>
<b>ESCRITOS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La Corte Constitucional ha manifestado que los actos administrativos son básicamente la manifestación de</li></ul>

	<p>voluntad que emite la administración y que, como consecuencia a ello, producen efectos jurídicos. Además, crean, extinguen o modifican efectos jurídicos. Estos actos administrativos se conocen como los más convencionales porque se encuentran plasmados en el papel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uno de los elementos más importantes de esta figura es la voluntad.</li> <li>• Los actos administrativos tienen diversos conceptos, los cuales por esencia son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Criterio jurisdiccional: El control es ejercido por parte de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.</li> <li>• 2. Criterio Orgánico: El que se encuentra expedido por toda autoridad administrativa o un particular en el ejercicio de sus funciones.</li> <li>• 3. Criterio funcional: Que se encuentra en el ejercicio de la función administrativa.</li> </ul> </li> </ul>
<b>ELECTRÓNICOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principalmente regulado en el artículo 57 del CPACA, Las autoridades pueden emitir actos administrativos de manera electrónica, en donde se debe establecer primordialmente la integridad, autenticidad y disponibilidad del acto mismo.</li> <li>• Se configuran mediante archivos electrónicos.</li> <li>• Mensajes de datos electrónicos.</li> <li>• Tienen presunción de legitimidad.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una de las características más importantes del acto administrativo en esta modalidad, es la notificación electrónica</li> <li>• " los mecanismos electrónicos facilitan las relaciones entre el Estado y el ciudadano, generando confianza y transparencia" (Ortega, 2018, p. 27)</li> <li>• Además de ello, adquiere un carácter de eficacia cuando particularmente se expide a través de medios tecnológicos. (Ortega,2018).</li> <li>• Simplificación para la administración pública.</li> <li>• Contiene un documento electrónico.</li> <li>• Los actos administrativos de carácter electrónico deben contener un sujeto activo y pasivo, un objeto, causa, fin, mérito, forma, formalidad, entre otros.</li> </ul>
<b>VERBALES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La decisión no consta en un documento escrito, producen efectos jurídicos</li> <li>• El ordenamiento jurídico de Colombia reconoce los actos administrativos en la forma verbal.</li> <li>• La jurisprudencia del Consejo de Estado manifiesta que los actos verbales son verdaderos actos administrativos.</li> <li>• Se pueden formar por otros medios.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Son susceptibles a impugnación. De tal manera que; "... Cabe, entonces, establecer si en nuestro sistema jurídico los actos administrativos no solo pueden ser escritos sino también orales. Al respecto no existe ninguna norma general que condicione la existencia y validez de los actos administrativos, ya sean individuales o generales, a la formalidad de un escrito" (Consejo de Estado, Sentencia, 14 febrero, 2019)</li><li>• En otras palabras, para que un acto administrativo se tenga en cuenta como tal es necesario que cumpla dos exigencias indispensables, las cuales son; que exista una decisión por parte de la administración y que genere efectos jurídicos. De tal manera que, no es indispensable la aparición de un texto escrito para configurar un acto administrativo. Sin embargo, es importante mencionar que, "Esa formalidad se exige para los ordenamientos de carácter general y abstracto, y para los de contenido particular y subjetivo que deban notificarse" (Consejo de Estado, Sentencia 14 febrero, 2019)</li><li>• "La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en indicar que no hay solemnidad que indique que los actos administrativos deban ser plasmados por escrito, pues en algunas ocasiones se profieren de manera verbal, provocando eso sí, efectos jurídicos sobre el administrado, ello implica entonces que se hace necesario romper el paradigma de los medios escritos" (Sentencia, 14 febrero, 2019)</li></ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para efectos de control de legalidad los actos administrativos de carácter verbal se les debe probar su existencia.</li> <li>• "El acto administrativo verbal es el fruto de una decisión directa de una autoridad administrativa como persona natural. Este resulta de oficio o a petición de parte" (Ortega, L, p. 22).</li> <li>• Ejemplo: Derecho de petición en la forma verbal.</li> <li>• "El acto administrativo verbal se acepta en el derecho administrativo colombiano pudiendo ser demandado e inclusive ser objeto de medidas cautelares" (Ortega, 2018, p. 24)</li> </ul>
--	--

**Nota:** Para complementar con la información anterior, se debe mencionar que los actos administrativos se clasifican en escritos, electrónicos y verbales. Creación propia.

**Fuente:** Adaptado de: Colombia. Tribunal administrativo de Boyacá. (2019, 14 febrero) Radicado número: : 150013333003201700140-01. Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del Derecho. M.P. Felix Alberto Rodríguez Riveros.

De tal manera que, no importa la clasificación de los actos administrativos anteriormente relacionados, éstos deben ser emitidos por una autoridad completamente competente, acatando siempre las formas de cada procedimiento y para que posteriormente sea totalmente eficaz; se debe dar a conocer o difundir, eso dependiendo del acto administrativo en concreto que se este tratando. De tal manera que, se puede producir por publicación, notificación o comunicación. (Ortega, 2018)

## **2. Jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la naturaleza jurídica**

### **del Acto Administrativo Electrónico**

La Corte para este caso en concreto, tuvo que decidir sobre el control de legalidad de un acto administrativo de carácter electrónico que se encontraba creando derechos para los administrados, en donde se debatía que ciertos preceptos violaban algunos artículos de la Ley 1137 del año 2011; más conocida como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, en la razón de la decisión se determinó que el mencionado acto administrativo se encontraba conforme a los preceptos constitucionales y además contra las disposiciones de las normas inferiores tal y como lo es la ya mencionada Ley. De tal manera que se le garantizaban a los administrados todas sus potestades, puesto que se obró conforme a todos los preceptos establecidos por la normatividad de Colombia; razón por la cual se determinó que todo acto administrativo se debería encontrar permeado de legalidad, para que con ello se haga obligatoria la promulgación o expedición (Corte Constitucional, Sentencia C-1436, 2000)

En otras palabras, se tiene que la presunción de legalidad se convierte en una regla bastante importante para el acto administrativo de carácter electrónico y que como ya se mencionó; esta se presume (Arias García, 2014). Debido a que la administración debe velar conforme al ordenamiento público impartido en la normatividad, en donde se configura “el conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe transigencia ni tolerancia, por afectar a los principios fundamentales de la sociedad, de una institución o de las garantías precisas para su subsistencia” (Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2017)

Los actos administrativos son básicamente el modo ordinario de actuar por parte de la administración, en donde también se pueden realizar a través de medios electrónicos, de tal manera que tienen su exteriorización por medio de manifestaciones unilaterales que crean situaciones jurídicas particularmente objetivas, abstractas, de carácter general y que producen decisiones. Es así como en una jurisprudencia de la Corte Constitucional se establece como el principio de publicidad en la administración pública es relevante, ya que se considera una regla y pilar del Estado. En especial, para que las pronunciaciones emitidas por parte de la administración puedan ser conocidas por cualquier persona. Y más cuando se hablen de actos administrativos generales que no afecten de forma directa. Por tal motivo en esta providencia, se destacó que existen unos objetivos que permean al principio de publicidad y estos se basan específicamente en que se debe establecer una fecha de entrada en vigencia para el acto

administrativo de carácter electrónico; y en general, para todos los actos administrativos, lo que conlleva al amparo de la comunicación del contenido mismo del acto (Corte Constitucional, Sentencia C-620, 2004).

Ahora bien, actualmente existen unos Decretos que surgieron en Colombia relacionados con la emergencia sanitaria más conocida como el Covid. 19, en donde se han maximizado los actos administrativos de carácter electrónico y en donde se ha visto inmersa tanto la firma digital como la electrónica. De tal manera que, es relevante hacer alusión a dichos documentos que han tenido control de constitucionalidad por parte de la Corte. Debido a que en este escenario se hace evidente como la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de la firma de diversos actos administrativos emitidos por medios digitales, teniendo en cuenta que corresponde a un mecanismo que hace más ágil el procedimiento y permite prevenir temas de salubridad pública a través del contagio o contacto que se pueda llegar a tener.

En sentencia de la Corte Constitucional se declaró exequible el Decreto 458 del 28 de marzo del presente año, mediante el cual se adoptaron medidas para mitigar las condiciones de pobreza en todos los hogares que ostenten esta situación en el marco del territorio nacional y que se encuentren dentro del marco de estado de emergencia económica, social y ecológica; debido al Covid- 19. En esta jurisprudencia la referida Corte hace en estudio profundo, en donde se determina que el ya mencionado Decreto tiene como fundamento al artículo 215 de la Constitución Política de Colombia que explica la declaración de los Estados de emergencia. Y se manifiesta que dentro del marco Constitucional, el presidente de la república junto con la ayuda de los ministros, tiene la expresa facultad de emitir Decretos con fuerza de Ley en aras de mitigar exclusivamente la crisis e impedir su expansión. Es pertinente mencionar que el referido Decreto 468 fue promulgado con una firma electrónica de todos los ministros colombianos. Este acto administrativo es de carácter electrónico con lo cual; las firmas electrónicas permiten identificar a los ministros firmantes y los vincula en el mensaje de datos que se ha producido (Corte Constitucional. Sentencia C- 150, 2020)

En otra sentencia por parte de la Corte Constitucional, se estableció la constitucionalidad del Decreto 417 del 17 de marzo del año 2020, por medio del cual se declara “el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional” (C- 145, 2020). Aquí se estableció que la Corte debía realizar un control más allá de los formalismos debido a que

la situación en concreto lo ameritaba y dicho acto administrativo electrónico había sido ejecutado y publicado de manera idónea, con todos los requisitos pertinentes para su validez, la Sentencia analizó los diversos puntos de vista que se plasmaron para poder sobrellevar la contingencia actual que se encuentra enfrentando el país y por tal motivo, la Corte procedió a precisar todos los alcances o controles del poder ejecutivo en un Estado de excepción que responde posiblemente a la crisis más grande en los últimos tiempos. Además de ello, en la presente sentencia se recordaron todos los estados de excepción por los que había atravesado Colombia a lo largo de la historia y se reiteró que la Constitución Política de 1991 en estos casos especiales activa ciertos poderes que son otorgados al legislativo, esto siempre y cuando se respeten los preceptos señalados en el artículo 215 de la ya mencionada Carta Política. Por último, es importante resaltar que el Decreto 417 o acto administrativo de carácter electrónico fue producido mediante una firma electrónica en donde también todos los ministros aparecieron firmando dicho documento electrónico, respaldado así por un mensaje de datos.

### **3. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en relación con la naturaleza jurídica del Acto Administrativo Electrónico**

En materia de actos administrativos de carácter electrónico la Corte Suprema de Justicia ha mencionado que los actos administrativos se pueden declarar nulos en ciertas situaciones. En una sentencia se debatía el tema de los procesos de nulidad simple en donde se quería declarar la inconstitucionalidad del artículo 13 del Acuerdo 058 del año 1999, en donde se adopta el reglamento del Consejo de Estado debido a que prácticamente los acuerdos acusados limitan de cierta manera la competencia de la sección tercera del Consejo de Estado para conocer de las acciones de tutela que todos los ciudadanos interpongan. Sin embargo, se debía tener en cuenta que dicha distribución de competencia no es contraria a la Constitución Política ni a la Ley. Por lo que se decidió entonces que la competencia para conocer de las acciones de tutela se encontraban en cabeza de todos los jueces por ser de naturaleza constitucional y que así mismo lo amparaba la Carta Política (Corte Suprema de Justicia, Sentencia 30 octubre, 2018). Lo anterior permitió que la nulidad por inconstitucionalidad invocada en el asunto se declara debido a las razones que expusieron y a los fundamentos jurídicos que se presentaron en el presente caso. Por otro lado, es importante señalar que se le determinó a la Corte Suprema de Justicia la plena capacidad para



conocer de los actos administrativos emitidos por parte del Consejo de Estado y por tal motivo se emitió la respectiva decisión. En efecto, el pronunciamiento que en este aspecto emitió la corte; fue publicado a través de un documento electrónico y de igual forma, firmado electrónicamente.

En otra sentencia de la Corte Suprema de Justicia se quiso determinar la validez jurídica de los actos administrativos de carácter general emitidos a través de documentos electrónicos. De tal forma, se mencionó a lo largo de dicha jurisprudencia que los documentos electrónicos se encuentran permeados del principio conocido como equivalencia funcional, en donde se le atribuyó a todos los elementos emitidos de forma tecnológica unos soportes de validez para el documento original siempre y cuando quede totalmente garantizada la autenticidad e integridad del documento mismo (Naranjo, 2016). Por tal motivo, se discutió que los mensajes de datos realmente contienen garantías viables para la ejecución de actos administrativos en la modalidad electrónica.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha resaltado que; todos los documentos electrónicos deben estar en armonía con la Ley 527 del año 1999, ya que funge como el cuerpo normativo transversal y que las interpretaciones realizadas por medio de dichos documentos deben ser completamente capaces de emitir efectos jurídicos, y en donde se asegure realmente del archivo o comunicado en mensaje de datos que se vaya a realizar. En otras palabras, la Corte explica que se necesita una fiabilidad en cuanto al documento electrónico, en donde juega un papel trascendental la forma en como se haya producido dicho mensaje de datos; esto con el fin de garantizar la inalterabilidad y transmisión de la información consignada en el acto administrativo de carácter electrónico (Corte Suprema de Justicia, Sentencia SL2670, 2018).

### **3.1.Firma digital y firma electrónica**

La Corte Suprema de Justicia para hacer referencia a los actos administrativos de carácter electrónico ha hecho énfasis en los componentes jurídicos que tienen la firma digital y la firma electrónica. A tal punto que se tiene como firma electrónica toda aquella que sea producida por medios tecnológicos garantizados, en el mensaje de datos se identifica plenamente a la persona que produce el acto. Es decir, dicha firma electrónica le otorga una protección jurídica a los documentos electrónicos. Por otro lado, la firma digital es por lo tanto un valor numérico que se sujeta a un mensaje de datos, que se encuentra guiado

básicamente por un procedimiento matemático en donde por esencia se emplea una clave privada y otra pública para la transmisión del documento. La Corte ha mencionado que la firma digital también garantiza la inalterabilidad del documento porque destaca e identifica a la persona que está emitiendo el mensaje y lo permea de certeza. En otras palabras, la firma digital le ofrece ciertas garantías necesarias que respaldan la seguridad absoluta de los medios digitales (Corte Suprema de Justicia, Sentencia STC057, 2019).

#### **4. Desarrollo del Acto Administrativo Electrónico en Chile**

La figura de los actos administrativos de carácter electrónico son una herramienta que se ha expandido en el territorio chileno y esto es debido al gran aporte que le generan a las contrataciones públicas de los países que lo implementan. Por esta razón, es pertinente traer a colación su desarrollo en Chile ya que es una de las normatividades más destacadas y compatibles con Colombia.

Ahora bien, en la jurisprudencia Chilena se tiene que el acto administrativo es una noción meramente sustancial, en donde se debe tener en cuenta primordialmente el contenido del acto, la finalidad y el medio para llegar a la justicia. Al igual que en Colombia, la legislación de Chile, consagra unos principios esenciales para la contratación y que se encuentran amparados en la Constitución Nacional. En efecto, el acto administrativo se tiene como un acto jurídico que pertenece al órgano del Estado en donde el objetivo primordial es velar por el interés general y por ser; “una ordenación racional unilateral dictada por un órgano estatal en ejercicio de función administrativa, que destinada a satisfacer una función pública concreta, produce efectos jurídicos directos” (Corte Suprema, Fallo: 24.827, 2020).

El anterior postulado quiere decir que los actos administrativos en la jurisprudencia chilena no pueden ser por ningún motivo arbitrarios puesto que generan vicios graves a la contratación pública y además, van en contravía de los principios fundamentales que la Carta Política emana, es decir, el fin elemental de esta herramienta es por esencia garantizar el bien común de todos los administrados y cumplir los fines esenciales del Estado. Conforme a lo anteriormente señalado se debe mencionar que en la legislación Colombiana también se quiere como finalidad garantizar los fines estatales en aras de salvaguardar el interés general sobre el particular, y es por esta razón que la función pública se encuentra permeada de unos principios que ayudan a cumplir este cometido.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el acto administrativo es además, un mandato que ostenta una decisión completamente imperativa en donde se derivan efectos que dominan. En pocas palabras, son actos administrativos que obligan a todas las partes involucradas, en donde se transforma en situaciones de hacer o no hacer, de dar, de abstenerse a la hora de actuar u obrar, que;

Obliga a quien beneficia o grava. Afecta situaciones de sujetos que se ven constreñidos o impuestos, o beneficiados, según sea el caso, por una decisión a la cual quedan obligados, vinculados y sometidos, en la medida, que tal decisión u orden sea conforme a la Constitución y normas adecuadas a ella, que le sirven de sustento y fundamento jurídico (Corte Suprema, Fallo: 27.716, 2019)

Esto dicho en otras palabras, significa que los principios fundamentales de la contratación pública juegan uno de los papeles más fundantes en la práctica; puesto que ninguna disposición que se establezca en un acto administrativo debe vulnerar algún precepto Constitucional o Legal y jurisprudencial. De tal manera que; se torna indispensable mencionar que el bien común consagrado por la Constitución de Chile, es el mecanismo perfecto para comprender que pese a ser la finalidad esencial del Estado; también es el comienzo para la ejecución de un acto administrativo de carácter general, en donde se emanan ordenes o decisiones para todos los administrados.

En consecuencia, se debe establecer un orden traducido en un ordenamiento que se encuentra conformado por el autor del acto administrativo y los destinatarios o las personas a quien se dirige dicho acto. Sin embargo, este ordenamiento necesariamente requiere de una decisión imperativa. Esto significa que, todas las partes intervinientes quedan a disposición de situaciones jurídicas completamente particulares ya sea de subordinador o subordinado. En donde la administración tiene la obligación entera de satisfacer todas las necesidades de las personas y es por esta razón que el Estado a través de las funciones administrativas y de sus funcionarios; tienen un poder inigualable porque pueden realizar disposiciones y tomar decisiones siempre que éstas se encuentren conforme a derecho.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que;

No es cualquier decisión la que puede configurar un acto administrativo en el derecho chileno; solo cabe asignar tal naturaleza o carácter a aquella decisión

que sea racional, esto es adecuada a la razón, pudiendo utilizarse también la idea de razonable, en el sentido que debe estar prevista de racionalidad (Corte Suprema, Fallo: 36.953, 2019).

La idea principal del anterior postulado, es que el acto administrativo se debe emitir y debe estar permeado por la razón, es decir, se debe encontrar completamente sustentado o respaldado por el funcionario competente que lo expide; debido a que esa racionalidad tiene por esencia que satisfacer las necesidades de los demás para el interés público. Además que también implica una decisión completamente motivada y para que no carezca de validez, debe ser totalmente proporcionada.

Al determinar que un acto administrativo es proporcionado, esto indica que debe ser adecuado tanto para la persona o entidad que lo expide como para los destinatarios y que la decisión que se adopta tiene que encontrarse en el medio idóneo para su expedición, de lo contrario se vulnerarían los principios fundantes de la contratación pública y además, no podría satisfacer necesidades en pro del interés general. Es por esta razón que, el ordenamiento administrativo chileno no concibe un acto administrativo arbitrario puesto que la decisión que el acto mismo debe contener no puede ser contraria al principio de igualdad, debido a que este es uno de los principios más relevantes en este campo, en donde se establece que ninguna autoridad administrativa puede establecer diferencias arbitrarias o algún tipo de discriminación que no contenga algún fundamento jurídico, so pena de encontrarse viciado y acarrearle su nulidad. En todo caso, un acto administrativo que es nulo también es carente de la razón y por tal motivo, la Constitución chilena permea que no tendría validez jurídica (Ferrara, 2011). Por otro lado, es importante resaltar que la Carta Política trae a colación una figura bastante imprescindible en este campo; conocida como el recurso de protección y es aplicable a todo ciudadano que se encuentre en grave peligro, amenazado o vulnerado algún derecho fundamental debido a un acto u omisión arbitraria ejercida por una autoridad administrativa competente (Corte Suprema, Fallo: 33.271, 2020)

Como consecuencia, una vez visto el acto administrativo en Chile, es pertinente mencionar el procedimiento administrativo electrónico en el mismo país, puesto que le otorga más agilidad y transparencia a las contrataciones públicas. De tal manera que; el sistema del papel como tiene un elevado costo económico ha quedado obsoleto e insuficiente y este puede ser remplazado satisfactoriamente a través de un soporte digital. Los juristas chilenos

realizaron un completo debate durante largos años acerca de la implementación de las TIC en actividades administrativas y específicamente en la función con el Estado, en donde llegaron a la conclusión de que el papel si bien les había sido muy útil en sus antepasados; es una figura que ya debe remplazarse por muchos factores de evolución y desarrollo en la esfera del derecho.

Dentro de los aspectos jurisprudenciales de Chile, se debaten distintos aspectos que imponen las leyes del ya mencionado país, en donde las bases del procedimiento administrativo, específicamente para los actos administrativos de carácter electrónico, se deben establecer que todos los elementos del acto administrativo a través de medios tecnológicos tendrán el mismo vigor que los actos administrativos tradicionales; esto con el fin de conservar todos los elementos indispensables con los que se encuentra compuesto y además, garantizar la eficacia, eficiencia y validez del acto mismo. Aunque si bien es cierto, la finalidad de esta figura sería la misma, es decir, prevalecer los fines esenciales del Estado y amparar el interés general sobre el particular en aras de proteger los principios fundamentales que consagra la Constitución de Chile. Sin embargo, este postulado se tornaría diferente en cuanto a su medio de producción, la forma en que se plasmará la decisión unilateral por parte de la administración será mediante componentes electrónicos; con un soporte material completamente distinto. Es por esta razón, que se debe tener en cuenta componentes indispensables y nuevos como lo es el expediente electrónico, a través de esta figura se sustentará los documentos presentados; teniendo en cuenta siempre la expedición de la fecha y hora de su recepción (Corte Suprema, Fallo: 17.374, 2019)

De igual forma, en la misma jurisprudencia anteriormente referida se menciona que la firma electrónica que es otro componente indispensable para la composición del acto administrativo de carácter electrónico, y es así como la gestión pública chilena incentivó el comercio electrónico, otorgándole seguridad y certeza a todos los procedimientos realizados a través de medios tecnológicos. Es importante mencionar que esta Ley de Colombia nació para regular principalmente aspectos comerciales y mercantiles. Sin embargo, hoy en día se encuentra regulando absolutamente toda la esfera tecnológica incluso en lo concerniente a la expedición y promulgación de los actos administrativos en la modalidad electrónica; esta figura también es muy similar a la legislación Colombiana, ya que la Ley 527 del año 1999

nació para regular en principio aspectos netamente comerciales; aunque con el tiempo se fue dotando de seguridad y funcionó la aplicabilidad en la administración pública de Colombia.

En efecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de apelaciones manifiesta que la Ley 19.799 de Chile regula particularmente los documentos electrónicos y todo lo concerniente a sus efectos legales y como se dijo anteriormente, le presta seguridad al uso de esta nueva herramienta. Es importante mencionar que este componente le otorgó un gran avance a la legislación chilena ya que centra su mirada en la firma electrónica para la administración del Estado. En donde se deben garantizar primordialmente todos los requisitos idóneos para su producción. Se tiene que; “ Los órganos del Estado podrán ejecutar o realizar actos, celebrar contratos y expedir cualquier documento, dentro de su ámbito de competencia, suscribiendolos por medio de firma electrónica” (Fallo : 30.013-2019). Complementando el postulado anteriormente mencionado, la legislación chilena otorga ciertas excepciones en las cuales la Constitución Política o incluso la Ley, exijan una solemnidad que no pueda producirse mediante documento electrónico o que simplemente requiera la actuación netamente personal de la autoridad administrativa o el funcionario competente.

Existe además, en otra jurisprudencia de la Corte Suprema de Apelaciones destaca que la Ley 19.880 en el ordenamiento chileno, se estipulan los actos administrativos de carácter electrónico gozan de unos principios indispensables para la administración electrónica y que garantizan primordialmente la función pública del Estado, dichos principios también se tienen como reglas imperativas que son aplicables a todos los procedimientos administrativos en Chile. En donde se respetan las garantías procedimentales y el cumplimiento de los principios porque lo cierto es que, la utilización de los medios tecnológicos al igual que los actos administrativos plasmados en el papel, también garantizan todos los componentes que rigen la contratación pública. Como primer principio se encuentra el de la escrituración; además se establece que los actos administrativos deberán ser producidos por escrito o por medios electrónicos; de tal manera que tendrían la misma categorización e importancia. Lo importante en este aspecto, es que exista un soporte del acto administrativo; independientemente de su modalidad y que además cuente con la firma completamente idónea, esta puede ser plasmada en el papel o simplemente una firma electrónica. En el segundo principio se encuentra la gratuidad, en donde se establece que el formato en la forma electrónica de ninguna manera eleva costos para la administración. Por el contrario,

disminuye costos para todos los interesados en la expedición de ese acto administrativo; en este punto, el requisito más indispensable económicamente hablando es la conexión a internet, en donde no se necesitarían sumas cuantiosas (Corte Suprema, Fallo: 38.890, 2019)

Como tercer principio está el de celeridad, en donde se tiene que la implementación y uso de las tecnologías de la información; incentivan de manera amplia la eficacia y eficiencia de del acto administrativo producido por estos medios. En un cuarto principio, se encuentra la economía procedimental, en donde básicamente la administración pública debe tener la facultad de actuar con máxima económica en cuanto a los medios con eficacia, es decir, debe evitar siempre los trámites dilatorios, ya que esto vulneraría el principio y no se cumpliría la meta que tiene los medios electrónicos, la cual es; buscar la forma de que los medios tecnológicos cumplan con los fines esenciales y asimismo, se puedan agilizar todos los trámites administrativos. En un quinto principio, se encuentra la contradictoriedad, en donde se persiguen las alegaciones y cualquier documentación que se pueda agregar al juicio y para poder acceder al expediente electrónico es indispensable que se adopten las medidas necesarias para poder respetar los principios de contradicción e igualdad. El sexto principio es la imparcialidad, puesto que al emplear medios electrónicos; se propicia en mayor proporción la publicidad y transparencia, entonces estos postulados exigen que la administración cuente con un nivel de imparcialidad en sus actuaciones, es decir, el objetivo primordial es aumentar los niveles de objetividad en la legislación chilena. En el séptimo principio está la no formalización en el procedimiento administrativo, en donde este debe ser aplicado para garantizar los intereses del ciudadano en aras de prevalecer su participación. Luego se encuentra la impugnabilidad; en donde los actos administrativos electrónicos no son un impedimento para la realización de este principio, puesto que por esencia se garantiza la interposición del recurso de reposición jerárquico; realizado a través de medios tecnológicos. Por último, se encuentran los principios de publicidad y transparencia. Para la legislación chilena; los actos administrativos emitidos en la modalidad electrónica incrementan ampliamente estos dos principios ya que se pueden publicar de una manera más rápida e idónea en la plataforma oficial de las entidades administrativas, los interesados y demás ciudadanos pueden verificar la información pertinente y acceder a ella sin ningún inconveniente (Corte Suprema, Fallo: 5.872-201).

Para la legislación chilena, la implementación y uso de las tecnologías de la información en los procedimientos de la administración pública, específicamente en lo concerniente a los actos administrativos de carácter electrónico; son una brecha de avance para la función administrativa y son procesos de modernización para el Estado, en donde se desarrollaron nuevas herramientas que incentivan la contratación electrónica y en donde se prevalecen todos los principios anteriormente señalados en aras de prevalecer los intereses generales y garantizar los fines esenciales del Estado chileno.

#### **4.1.Desarrollo del Acto Administrativo Electrónico en España**

La función pública Española es uno de los pioneros de la implementación de actos administrativos electrónicos, de tal manera que se llegó a denominar como administración electrónica con el fin esencial de incentivar la eficacia de la función administrativa en todos los procedimientos concernientes al acto administrativo. De tal manera que se dieron a la tarea de estudiar todas las necesidades para dotar a la administración pública electrónica de un marco normativo para la regularización de las disposiciones tecnológicas y es así como la jurisprudencia españolas realizó un estudio de la Ley 30 del año 1992, en donde se estableció una implementación progresiva de las tecnologías de la información en toda la esfera administrativa. Como consecuencia de ello, se incentivo la sede electrónica como una oficina virtual para que los ciudadanos tuvieran acceso a las plataformas digitales con el fin de solicitar cualquier información o gestionar cualquier trámite administrativo; esta implementación de la sede electrónica para producir actos administrativos en esta modalidad se dio principlamente para garantizar la equivalencia funcional en comparación con los actos que se encuentran plasmados en el papel (Barnés, 2010). Es decir, la modalidad virtual debe contar siempre con las estrategias adecuadas y las herramientas para prevalecer siempre el interés general en el marco de la función pública. De tal manera que, en España se crearon diversos comités concernientes a la regulación de esa materia; en donde principalmente se encuentra el comité sectorial de la administración electrónica, traducido como un organo técnico para la cooperación de la administración general del Estado. En donde, existen unas entidades administrativas que son completamente autónomas de emitir decisiones de forma unilateral para producir efectos jurídicos. En pocas palabras, son las capacitadas para emitir actos administrativos en la modalidad electrónica con la salvaguarda de la administración



electrónica que asegura la eficiencia de todas sus funciones. (Tribunal Constitucional Español, Sentencia 4, 2020)

En un segundo comité, se encuentra el de asegurar primordialmente la compatibilidad en todos los sistemas que se emiten de forma virtual para que los administrados y la administración se surtan de interoperabilidad (Martínez, 2004). Todo lo anterior tiene el fin de cumplir los intereses esenciales del Estado y velar por los principios Constitucionales y legales que permean a la legislación Española. En efecto, estos comités desarrollan a gran escala la administración electrónica de España y el procedimiento como tal.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que los actos administrativos electrónicos en España también deben velar por los principios esenciales que rigen en la administración pública, de tal manera que se torna indispensable mencionar que, según Oliver (2011), el principio de transparencia que es el más fortalecido con esta práctica. Esto se debe a que todas las personas podrán tener la oportunidad de acceso a las plataformas oficiales que dispone la nueva directiva europea en donde se incentivan estas prácticas para además, agilizar a la función pública puesto que los métodos tradicionales han quedado obsoletos con el paso del tiempo. Por tal motivo, uno de los entes más indispensables en este campo es la figura de la sede electrónica y de igual forma, la del gobierno electrónico ya que fungen como las entidades de cabecera para que pueda funcionar la administración como tal y manifestar sus voluntades de manera unilateral para; crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones en aras de generar efectos jurídicos. Comparado con la legislación Colombiana, estos preceptos son bastante similares ya que se utilizan herramientas particularmente parecidas para la producción de actos administrativos en la modalidad electrónica.

## **CONCLUSIONES**

En primer lugar, es claro que se pueden emitir actos administrativos en la modalidad electrónica y que estos cuentan con la misma idoneidad que ostentan los actos administrativos generales plasmados en el papel. Ahora bien, para resolver el problema jurídico inicialmente planteado de ¿Cuál es el desarrollo jurisprudencial del acto administrativo electrónico? Se puede determinar que en la jurisprudencia colombiana, chilena y española existen regulaciones muy similares con respecto a los actos administrativos electrónicos de tal manera que, se puede llegar a establecer que dichos actos administrativos son emitidos por

autoridades administrativas que son las encargadas de velar por el correcto cumplimiento de todos los requisitos y elementos indispensables para que se puedan ejecutar sin ningún contratiempo. Para ello, es necesario contar con unos principios tales como la autenticidad, integridad, inalterabilidad, entre otros. Que los blindan de facultades especiales para aportar mayor confianza a la producción de los actos electrónicos. Adicionalmente a ello, en el presente escrito se pudo determinar que los actos administrativos deben cumplir con un objetivo esencial basado fundamentalmente en la salvaguarda del interés general incluso por encima del particular y esto es uno de los conceptos más claves con los que cuenta los actos administrativos en general.

En efecto, como se pudo evidenciar; los actos administrativos de carácter electrónico se encuentran compuestos por una serie de requisitos y solemnidades que se debatían en la jurisprudencia de las tres altas Cortes y que de igual manera se deben consumir para que el acto mismo pueda nacer a la vida jurídica surtiendo los efectos pertinentes. En sí, se logró ampliar el concepto de los actos administrativos en esta modalidad ya que simplemente son los tendientes a crear, modificar o extinguir obligaciones jurídicas, presentándose en diversas formas y más aún con la nueva modalidad tecnológica que le aportó dinamismo y agilidad a las autoridades administrativas en donde a través de esta ingeniosa modalidad se incentiva también a la administración pública electrónica.

Los actos administrativos ostentan también unos presupuestos que conllevan a la esencia y al fin del acto mismo, de por sí; el acto debe ser una manifestación meramente intelectual. Por tal motivo, es importante exteriorizarlo con los requisitos indispensables que lo componen. Es por esta razón, que los medios electrónicos de la actualidad han propiciado grandes impactos en la rama del derecho administrativo. La jurisprudencia colombiana se ha encargado de definir y conceptualizar de diversas maneras la figura con el fin fundamental de lograr un mayor entendimiento en el campo. Sin duda alguna, los actos administrativos de carácter electrónico cuentan con la misma idoneidad y seguridad que los actos plasmados en el papel.

En otras palabras, a través de la jurisprudencia se da a entender que la administración pública cuenta con una herramienta bastante esencial que permite evolucionar a la administración y de igual forma, desarrolla las relaciones entre los administrados con las autoridades que ejercen funciones administrativas y que esta modalidad electrónica le aporta

una cantidad de posibilidades que sustituyen radicalmente todos los implementos realizados en forma física, es decir, plasmados en el papel. Sin embargo, es importante resaltar que la producción de los actos administrativos de forma electrónica se ejecutan a través de firmas digitales y electrónicas que garantizan la transparencia y fiabilidad del documento electrónico y ahora en esta pandemia mundial que está viviendo el mundo entero a causa del Covid- 19, todos los actos administrativos que ha expedido la administración en Colombia sin duda alguna facilitan una mejor comunicación y responsabilidad por parte de la administración pública.

Con todo lo anteriormente dicho, se debe precisar que en la jurisprudencia colombiana se consideran muy tradicionalistas los documentos consignados en la modalidad física. Sin embargo, esta práctica ha generado diferentes congestiones en distintas áreas y diligencias que se deben realizar en la esfera pública. Pese a esta situación; grandes juristas no se oponen a la implementación de estas nuevas tecnologías que evitan simplemente un retroceso a la ambigüedad y más cuando se trata del bien común de una sociedad.

## REFERENCIAS

- Arias, F. (2015). *Estudios de derecho procesal administrativo*. Tunja: Universidad Santo Tomás.
- Barnés, J. (2010). El procedimiento administrativo y el gobierno electrónico. *Cuadernos de derecho local*, 22, 83-95.
- Bernal, F. (2008). *Derecho administrativo: Programa Administración Pública Territorial*. Bogotá: ESAP.
- Fernández, I. (2015). *Manual de derecho procesal administrativo y contencioso administrativo*. Armenia: Universidad La Gran Colombia.
- Ferrara, J. (2011). Los procesos administrativos en el derecho chileno. *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, 251-277.
- Flórez, G. (2014). La validez jurídica de los documentos electrónicos en Colombia a partir de su evolución legislativa y jurisprudencial. *Verba Iuris*(31), 43-71.
- Fonseca, Z. (2012). Problemas de eficacia en actos administrativos expedidos por medios electrónicos. *In Vestigium Iure*, 5, 95-108.
- Fuentes, J. (2017). La operación administrativa es procedente cuando se expiden actos administrativos de carácter general y particular. Trabajo de grado. *Bogotá Universidad Católica de Colombia*. Recuperado de: <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/23799/1/RM%20aprobado%20Jhon%20Fuentes%20Rojas.pdf>
- Laguado, R. (2003). Actos administrativos por medios electrónicos. *Vniversitas*, 89-128.
- Martínez, J. (2004). La necesidad de interoperabilidad de la información en los servicios de la administración electrónica: XML, una posible solución. *e-Cooperación en la Administración Pública*, 1-8.

- Muñoz, F. (2016). Del derecho electrónico en Colombia: interpretación normativa, producción y valoración probatoria de la firma digital y/o electrónica. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. Recuperado de <https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/3053>.
- Naranjo, M. (2016). *Validez probatoria del documento electrónico soporte de hallazgos fiscales en las auditorias*. Tesis de maestría. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de <http://bdigital.unal.edu.co/52349/1/51743793.2016.pdf>
- Oliver, R. (2011). La sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. *Revista d'internet, dret i politica*(12), 44-54.
- Ortega, L. (2018). El Acto administrativo en los procesos y procedimientos. Editorial: Universidad Católica de Colombia.
- Pérez, R. (2013). *Eficacia y validez del acto administrativo*. Tesis de maestría. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de <http://www.bdigital.unal.edu.co/9877/1/700600.2013.pdf>
- Rodríguez, L. (2017). *Derecho administrativo general y colombiano*. Bogotá: Temis.
- Ruíz, F. (2016). *El acto administrativo electrónico en Colombia*. Tesis de Maestría. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de <https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/14691>
- Sánchez, M. (2014). Eficacia y validez del Acto Administrativo electrónico- una perspectiva del derecho comparado entre Colombia y España. Bogotá, D.C. Universidad Católica de Colombia.
- Sánchez Torres, A. (2007). *Acto administrativo*. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura.
- Torres, J. (2016). *La transparencia y el buen gobierno: una perspectiva desde las obligaciones de los gobiernos locales*. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.

## **Jurisprudencia y leyes**

Congreso de la República de Colombia (1999). Ley 527 de 1999: Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial: 43.673

Congreso de la República de Colombia (2011). Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Diario Oficial: 47.956.

Colombia. Consejo de Estado (26 de Noviembre de 1917). Auto, acción de nulidad. C.P. Luis Felipe Rosales.

Colombia. Consejo de Estado (26 de Noviembre de 1917). Auto, acción de nulidad. C.P. Luis Felipe Rosales.

Colombia. Consejo de Estado (24 de Abril de 1934). Auto, acción de Nulidad. C.P. Nicasio Anzola.

Colombia. Consejo de Estado (22 de julio de 1955). Auto, acción de Nulidad. C.P. Manuel Buenahora.

Colombia. Consejo de Estado. (30 de mayo de 1988). Expediente: 0549. Sala de lo Contencioso administrativo, sección cuarta. C.P. Hernán Guillermo Aldana Duque.

Colombia. Consejo de Estado (18 de Marzo de 2010). Radicado 11001-03-06-000-2010-00015-00/1989. C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.

Colombia. Consejo de Estado. (5 de agosto de 2010). Radicado número: 11001 0324 000 2007 00039 00. Sala de lo contencioso administrativo, sección primera. C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

Colombia. Consejo de Estado, (25 de mayo de 2017) Expediente 250002342000201400189 01. C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez.

Colombia. Consejo de Estado (17 de mayo de 2018). Radicado 25000-23-26-000-1997-13723-01/29942. C.P. Stella Conto Díaz del Catillo.

Colombia. Consejo de Estado. (28 de mayo de 2019). Radicado número: 11001-03-26-000-2017-00118-00(59837). Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera. C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

Colombia. Consejo de Estado. (11 de julio de 2019). Radicado número: 25000-23-37-000-2013-00173-01(21257). Sala de lo contencioso administrativo, sección cuarta. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

Colombia. Consejo de Estado. (1 de agosto de 2019). Radicado número: 17001-23-33-000-2015-00660-01(23334). Sala de lo contencioso administrativo, sección cuarta. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

Colombia. Consejo de Estado (23 de enero de 2020). Radicado número: 08001-23-33-000-2019-00556-01(ACU). Sala de lo contencioso administrativo, sección quinta. C.P. Rocío Araujo Oñate.

Colombia. Consejo de Estado (6 de febrero de 2020). Radicado 25000-23-42-000-2015-04729-01(2844-18). Sala plena de lo contencioso administrativo. C.P. Rafael Francisco Suarez Vargas.

Colombia. Consejo de Estado. (19 de febrero de 2020). Radicado 68001-23-33-000-2015-00020-01(23081). Sala plena de lo contencioso administrativo. C.P. Milton Chaves García.

Colombia. Consejo de Estado. (28 de abril de 2020). Radicado 11001-03-15-000-2020-01408-00. Sala plena de lo contencioso administrativo. C.P. Lucy Jannette Bermúdez Bermúdez.

Colombia. Consejo de Estado. (28 de abril de 2020). Radicación 25000-23-26-000-2010-00478-01(45010). Sala de lo contencioso administrativo. Sección tercera, Subsección A. C.P. María Adriana Marín.

Colombia. Consejo de Estado. (30 de abril de 2020). Radicado 11001-03-15-000-2020-01500-00(CA)A. Sala plena de lo contencioso administrativo. C.P. Martín Bermúdez Muñoz.

Colombia. Consejo de Estado. (4 de mayo de 2020) Radicado 11001-03-15-000-2020-01397-00. Sala plena de lo contencioso administrativo. C.P: Nicolás Yepes Corrales.

Colombia. Consejo de Estado. (7 de mayo de 2020) Radicado 11001-03-15-000-2020-01620-00(CA)A. Sala plena de lo contencioso administrativo. C.P. Guillermo Sánchez Luque.

Colombia. Consejo de Estado. (11 de mayo de 2020). Radicado 11001-03-15-000-2020-00944-00(CA). Sala especial de decisión. C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez.

Colombia. Consejo de Estado. (16 de junio de 2020). Radicado 11001-03-15-000-2020-02303-00. Sala especial de decisión. C.P. Nicolás Yepes Corrales.

Colombia. Consejo de Estado (16 de junio de 2020). Radicado 11001-03-15-000-2020-01832-00(CA)A. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

Colombia. Corte Constitucional. (25 de octubre de 2000). Sentencia C-1436 de 2000. M. P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

Colombia. Corte Constitucional. (30 de junio de 2004). Sentencia C-620 de 2004, 30 de junio. M.P.: Dr. Jaime Araujo Rentería.

Colombia. Corte Constitucional. (10 de marzo de 2017). Sentencia T-161 de 2017. M.P. José Antonio Cepeda Amarís.

Colombia. Corte Suprema de Justicia. (10 de julio de 2018). Sentencia SL2670-2018. Radicado 59114. M.P. Omar de Jesús Restrepo Ochoa.

Colombia. Corte Suprema de Justicia. (30 de octubre de 2018). Sentencia APL4729-2018. Rad.- 11-001-02-30-000-. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas.

Colombia. Corte Suprema de Justicia. (15 de enero de 2019). Sentencia STC057-2019. Radicado T 110010230000-2018-00525-00. M.P. Gabriel Hernández Villareal.

Colombia. Corte Constitucional. (20 de mayo de 2020). Sentencia C- 145 de 2020. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.



Colombia. Corte Constitucional (27 de mayo de 2020). Sentencia C- 150 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Chile. Corte Suprema de Apelaciones, (11 de marzo de 2020). Fallo: 33.271-2020, 11 de marzo, Ministros: Sra. Ángela Vivanco M., y los Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P., y Sr. Pedro Pierry A.

Chile. Corte Suprema de Apelaciones, Tercera Sala. (5 de junio de 2020). Fallo: 24.827-2020. Ministros: Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., y Sr. Leopoldo Llanos S., y el Abogado Integrante Sr. Julio Pallavicini M.

Chile. Corte Suprema de Apelaciones, (5 de junio de 2019). Fallo: 36.953-2019. Ministros: Sr. Carlos Aránguiz Z., Sra. Ángela Vivanco M., y Sr. Leopoldo Llanos S.

Chile. Corte Suprema de Apelaciones, (17 de junio de 2019). Fallo: 17.374-2019. 17 de junio, Ministro: Sr. Leopoldo Llanos S.

Chile. Corte Suprema de Apelaciones, Tercera Sala. (30 de junio de 2019). Fallo: 27.716-2019. Ministros: Sr. Sergio Muñoz G., y Sra. María Eugenia Sandoval G., el Ministro Suplente Sr. Raúl Mera M., y los Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G., y Sr. Antonio Barra R.

Chile. Corte Suprema de Apelaciones, (3 de octubre de 2019). Fallo: 30.013-2019. Ministros: Sr. Jorge Lagos G., y Sr. Julio Pallavicini M.

Chile. Corte Suprema de Apelaciones, (9 de diciembre de 2019) Fallo: 38.890-2019. Ministros: Sr. Jorge Zepeda A., y el Abogado Integrante Sr. Pedro Pierry A.

Chile. Corte Suprema de Apelaciones, (6 de marzo de 201). Fallo: 5.872-201. Ministros: Sr. Arturo Prado P. y Sra. Ángela Vivanco M. y el Abogado Integrante Sr. Rafael Gómez B.

Departamento Administrativo de la Función Pública (2017). Concepto 187921 del 16 de agosto de 2017. Radicado 20176000187921. Recuperado de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83120>

España. Tribunal Constitucional de España. (15 de enero de 2020). Sentencia 4/2020.

Magistrados: Andrés Ollero Tassara, Fernando Valdés Dal-Ré, Santiago Martínez-Vares García, Juan Antonio Xiol Ríos, Pedro José González-Trevijano Sánchez, Antonio Narváez Rodríguez, Alfredo Montoya Melgar, Ricardo Enríquez Sancho y Cándido Conde-Pumpido Tourón.